

Teatro de operaciones

# Número Cero

GUILLERMO LHUÉ

El pasado 22 de febrero el Presidente anunció su programa social cívico-militar. Cuando escuchamos las motivaciones, estuvimos de acuerdo con ellas. El principal problema del país es efectivamente la marginación de más del 40% de la población respecto a las oportunidades económicas y a los servicios sociales que constituyen la base del crecimiento de personas y familias, de su integración social; por tanto, también la base de la democracia.

La idea de movilizar a las Fuerzas Armadas para atender estas necesidades suena lógica a primera vista. He ahí una fuente de recursos parcialmente desaprovechados, que bien pueden ponerse al servicio directo de la ciudadanía. Salvo algunas regiones de frontera, el país no sufre amenaza exterior ninguna, por lo que cabe pensar que los soldados y oficiales militares emplearán mejor sus esfuerzos en trabajos sociales que en hacer instrucción en los cuarteles. (También podría pensarse que entonces más bien deberíamos reducir las FAN y ahorrar en costos, pero éste es otro asunto). El proyecto presidencial vino, además, acompañado de un llamado a la solidaridad de todas las instancias sociales con los más desfavorecidos, y de una vaga promesa de «plan de empleo», que al día siguiente congregó a los primeros cientos de voluntarios y de desempleados a las puertas de Miraflores.

## ¿Programas sociales o militares?

Lo que suena lógico puede no serlo tanto, sin embargo. Hay dos puntos en particular que deben ser discutidos antes de sumarse al entusiasmo popular de estos días.

El primero, es la posibilidad de que nos engañe una visión mítica de las Fuerzas Armadas. El Gobierno de las Fuerzas Armadas fue precisamente el de Pérez Jiménez, que muchos venezolanos recuerdan como una época de peculiar ejecutividad, sobre todo en materia de construcción de infraestructuras. Pero las FAN no han mostrado especial eficiencia en el uso de sus recursos durante los últimos años. Sobre casi cada pieza del equipamiento militar pesa un escándalo de Salvaguarda. Ello no tiene por qué repetirse en adelante, y estamos seguros de que «ojo pelao Chávez» hará lo imposible por evitar que acabe ocurriendo lo mismo

con este programa. De entrada, sin embargo, no es inteligente pensar a partir de mitos.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el estilo que funciona en los cuarteles seguramente fracasará en el manejo de una sociedad plural, compleja y libre. Será fácil caer en la tentación de hacer a nuestra sociedad menos plural, menos compleja y menos libre, para que el programa dé buenos resultados. El primer asomo de esto lo tenemos ya con la curiosa idea de que los médicos (quizás asimilados a las FAN) que participan en el operativo cívico-militar, decidirán qué mujeres indigentes serán esterilizadas, aún sin el consentimiento de la paciente. El uso de la esterilización voluntaria de mujeres pobres como método contraceptivo debe ser discutido desde el punto de vista ético, puesto que precisamente la falta de instrucción puede llevar a que la persona no se haga cargo plenamente de las consecuencias sobre su vida de tal mutilación. Pero la esterilización involuntaria constituye directamente un crimen, y si se hace en el contexto de un programa oficial, entonces se vuelve un crimen de Estado.

Creemos que nuestras Fuerzas Armadas venezolanas son realmente democráticas y no quieren dejar de serlo, por lo que serán capaces de resistir la tentación de conformar a la sociedad a su imagen y semejanza desde el mismo momento en que asome. Suspender el programa de esterilizaciones sería una excelente señal. Trabajar de acuerdo con, y subordinados a, los responsables civiles de los servicios sociales en cada estado y municipio, sería la señal decisiva. Esperamos tales señales con impaciencia para que los programas sean sociales y no militares.

## ¿Del programa al operativo?

El segundo punto para pensar es más serio. En las páginas de esta revista se ha sostenido repetidamente que la mejor política social es la combinación de una política económica con sentido social, que cree empleo bien remunerado, y dé un diseño institucional eficiente, que garantice el buen funcionamiento de la educación y la salud públicas.

Esto no es fácil de llevar a cabo, y de hecho ningún Gobierno reciente lo ha conseguido, pese a las buenas intencio-

nes de los ministros reformistas. En la situación actual, las angustias presupuestarias parecen obligar a un paquete fiscal que golpeará a los pobres, al centrarse en impuestos al consumo y no a la renta. El aumento de los salarios será del 20% y den las gracias. El precio del petróleo y la inestabilidad política resultado del fin de un sistema, empujan necesariamente a la recesión: las revoluciones son caras. Y la reforma institucional necesaria en la salud y la educación públicas no se hacen de un día para otro. En el mejor de los casos, con mucha inteligencia en el diseño y habilidad política en su ejecución, resultan asuntos de medio plazo.

Así pues, la alternativa más deseable, que cada cual obtenga la integración social de su integración productiva, no puede más que soñarse por ahora. Pero esto no es la primera vez que pasa. Ya la Agenda Venezuela se vio en el mismo disparadero, y respondió con programas sociales focalizados en los problemas clave, a los que se destinaron muchos cientos de miles de millones y que se ejecutaron en buena parte a través de organizaciones no gubernamentales. Tales programas, lanzados desde el primer día de la Agenda, otorgaron estabilidad social al Gobierno Caldera incluso en situaciones económicas difíciles. Hay que recordar que precisamente el retraso en el diseño e implementación de los programas sociales respecto al paquete económico, estuvo entre las causas principales del fracaso del programa liberalizador del segundo Gobierno Pérez.

Pues bien, he aquí que los programas sociales que funcionaron razonablemente en el Gobierno Caldera parecen haberse esfumado para ser sustituidos por un plan cívico-militar al que se destinan sólo doce mil millones del presupuesto, más lo que pueda recogerse pasando el platillo de las limosnas. Incluso el órgano rector de esos programas, el Ministerio de la Familia, que había funcionado como articulador de infinidad de organizaciones sociales y de instancias de gobierno local en la ejecución de los programas, desaparece subsumido en el del Trabajo, que indudablemente acaparará el protagonismo si continúa el anunciado enfrentamiento a muerte del Gobierno con los sindicatos.

Sin la base institucional con la experiencia precisa en el campo de lo social, estaremos pasando del programa al operativo, por buenas que sean las intenciones que hay detrás. Tendremos no políticas como sería deseable, ni programas como los que ya han sido probados con éxito... sino un carnaval de operativos en su lugar.

#### **Teatro de operaciones número cero**

El resultado es un cuadro social cuando menos peligroso. Mientras el Presidente acapará la escena política con la necesaria revolución constituyente y la no tan necesaria retórica de choque, su gabinete lanza un programa económico recesivo en la mejor ortodoxia de la derecha, y el sector social, imprescindible para amortiguar el golpe económico sobre los pobres, queda reducido a un esqueleto, falto de sangre, de músculo y quizás también de cerebro, aunque adornado de cachucha.

¿Qué ocurrirá entonces cuando los efectos de la recesión pesen más en el sentir popular que la retórica del Presidente, y erosionen las esperanzas en los cambios de raíz que tantos queremos? Hará falta algo más serio conceptualmente que un montaje de operativos cívico-militares. Harán falta siquiera verdaderos programas sociales bajo responsabilidad del Estado, que articulen organizaciones sociales con experiencia en las áreas respectivas, y no reclutas con el manejo del fusil recién aprendido. Y hará falta algo más serio en el presupuesto nacional que doce millardos, que entre diez millones de personas en pobreza crítica resultan a mil doscientos bolívares por persona: una arepa de queso y un refresco. La estabilidad social no puede confiarse a aportes espontáneos ni a enamoramientos nacionales.

La idea de reconstituir políticamente al país hacia más democracia viene a punto por el agotamiento del sistema, trancado de mil maneras. Pero será una batalla dura contra intereses ilegítimos y derechos maladquiridos, que tendrá lugar en un escenario económico adverso. La batalla podría perderse, arrastrando consigo la esperanza del pueblo que queremos compartir, en el teatro de operaciones número cero: el social.

**GUILLERMO LHUÉ**  
es filósofo y analista político